

Estado y crisis

Como sabemos, el Estado tiene capacidad suficiente para regular los ritmos de la economía capitalista. Puede intervenir sobre las políticas monetarias y fiscales de los mercados nacionales y adoptar medidas contracíclicas bajo la forma de leyes, políticas públicas o exenciones fiscales.

En un momento de cierre conservador del territorio europeo y español, la gobernabilidad del país adopta una tendencia nativista dirigida a expulsar del paraguas de la protección social del estado a ciertos segmentos de la población.

¿Nos permiten los giros securitarios, así como algunas reformas sobre la intervención social, identificar movimientos en esta dirección? En un contexto de crisis y de pérdida competitiva de algunas industrias, ¿hasta cuándo podrán el Estado y las administraciones mantener una política social más o menos consolidada que siga sosteniendo la paz social?

Introducción

Las convulsiones económicas y políticas que se suceden a nuestro alrededor -inflación, aranceles al coche eléctrico chino, escenario bélico, salida de VOX de los gobiernos con el PP por el reparto de menores no tutelados- dan cuenta de las formas que adopta la crisis capitalista en su proceso de descomposición. Sin embargo, la constatación de la crisis por sí misma no ayuda a definir los ritmos y las velocidades de la misma.

Aunque las señales de la crisis en las distintas formas que ésta adopta nos parezcan claras, no resultan tan claras las capacidades de intervención que tiene el Estado -y en este caso la UE, al ser el marco territorial y económico sobre el que se organiza el Estado español- sobre la misma en tanto que medidas contracíclicas.

Del mismo modo, la incapacidad que atraviesa el capitalismo occidental para reavivar las tasas de ganancia desde 1973 se traduce ahora en un momento de cierre conservador, y ello debido al malestar social al que da pie la gobernanza de la crisis y la correspondiente exclusión de distintos segmentos de población, lo que tiene lugar a velocidades y ritmos dispares.

A raíz de este giro neoconservador, es probable -y así lo van marcando las directrices europeas como el nuevo pacto de externalización de la frontera- que el gobierno de la crisis adopte formas que afecten de manera asimétrica a distintos grupos sociales. El Estado puede legislar y adoptar políticas públicas dirigidas a estabilizar la situación de determinados segmentos de la población, a la vez que otros grupos quedan expulsados de la protección vinculada al estado social. Es probable que quienes tengan que pagar los platos rotos de esta crisis sean aquellos que quedan fuera de todo circuito de representación e integración al interior de los aparatos del Estado

El propósito del presente texto, escrito desde Euskal Herria, no es otro que el de someter a discusión la capacidad del Estado para gobernar la crisis desde el momento

en que aspira a dar a luz a un “pueblo” afín al proyecto del gobierno progresista y a los planes de estabilización que se han puesto en marcha desde la aplicación del escudo social y el programa *NEXT Generation EU*. Y esto en una coyuntura en la que emergencia de la extrema derecha europea está produciendo una suerte de cierre de filas de lo existente, la cual edulcora la imagen del actual gobierno y la UE como trincheras antifascistas al tiempo que olvida el contexto de instauración del Pacto Verde Europeo, donde se prioriza la actividad bélica, verde y digital a fin de adaptarse, si bien de manera un tanto tardía, a ese escenario en el que Europa resulta ser la gran perdedora de la globalización.

Se trata de identificar también ciertas tendencias del gobierno de cara a eso que hemos denominado los “perdedores” de la crisis, como se echa de ver con la desaparición de posturas políticas propias de los nacionalismos periféricos -elementos clave, como sabemos, para la gobernabilidad política del país. Tendencias que apuntan a un cierre nativista cada vez mayor de las políticas públicas, así como a la estrategia securitaria y las batallas culturales que giran en torno a la población migrante -la reciente polémica sobre los menores no tutelados da buena cuenta de ello.¹

Sobre los fondos NEXT Generation

El programa *Next Generation EU* es uno de los principales instrumentos sobre los que se sostiene la nueva agenda de la UE tras la publicación en el año 2019 del Pacto Verde Europeo. El shock pandémico del año 2020, con un 11% del retroceso de PIB en el Estado español, aceleró la apuesta europea por una recuperación de la matriz económica verde y digital. Una apuesta que implicaba un supuesto giro hacia las políticas de austeridad adoptadas durante la crisis del 2008, hacía la aplicación de unas medidas contracíclicas neokeynesianas de naturaleza reguladora, redistributiva y de participación pública en la económica. No obstante, detrás del halo bajo el que se recubre dicho proyecto, habría tres aspectos que subyacen al proyecto: la captura de nichos de mercado verdes y digitales², la financiación mediante el consumo inducido de gasto público en megaproyectos e infraestructuras y el rescate a grandes sectores industriales en crisis, como la automoción, la aeronáutica o el sector agroalimentario. Se trata, al fin y al cabo, de acomodar la acumulación de capital al nuevo escenario global.

Tal intervención sobre la política monetaria debe situarse en un contexto muy particular: y es que Europa se sitúa ya como la perdedora de la multidimensionalidad de la crisis capitalista y donde el proyecto económico europeo está mostrando un retraso tecno-económico cada vez más notorio respecto a sus competidores chinos (la reciente instauración de nuevos aranceles al coche eléctrico chino) y estadounidenses,

¹ El reparto autonómico de los menores no tutelados no sólo ha tenido repercusiones en la salida de VOX de los gobiernos autonómicos donde gobierna junto con el PP. Imanol Pradales, elegido *lehendakari* en las últimas elecciones autonómicas de la CAPV, ha declarado recientemente que el reparto de los menores es “asimétrico” y que éste debería darse de manera proporcional, tal y como ocurre con los fondos “Next”.

² Apuesta estratégica que hasta este momento se ha visto bastante dañada por la introducción en los EE.UU. de la IRA y la CHIPS *and Science Act*.

bloque en el cual se encuentra subordinado en lo que respecta a las directrices bélicas sobre las que se asienta una parte de la agenda política de la UE.

En lo que respecta a Alemania, eje geopolítico y epicentro industrial capitalista del continente, el país atraviesa una profunda crisis en lo tocante a los cimientos de su modelo económico, político y social. Y ello debido a la redefinición de la arquitectura global que implica la creciente tensión entre los Estados Unidos y la República Popular China. Dicha redefinición ha producido un alejamiento de la tradicional relación energético-diplomática del eje Moscú-Berlín, aun cuando Alemania no haya adoptado decisiones parejas en lo que respecta a China. Y es que un desacople generalizado con China en este momento provocaría en Berlín -y en Frankfurt- efectos mucho más dramáticos -y cuyas consecuencias, dicho sea de paso, tampoco podrían sostenerse a largo plazo.

El avanzado sistema de bienestar social alemán está viéndose claramente afectado por la desaceleración del mercado global, donde las exportaciones de la industria alemana ya no son suficientes para mantener a flote el pacto social sostenido hasta el momento actual por la *Grosse Koalition*. La inflación está creando nuevas divisiones en la sociedad alemana, cuya clase media no depende de un capital basado en bienes raíces -no de de forma sustancial. El gobierno de Scholz, al igual que el de Sánchez, ha intentado abordar las dificultades que plantea el actual escenario aprovechando los fondos europeos para hacer frente a la crisis energética y del COVID, tratando de sortear así el freno constitucional sobre la austeridad y la deuda, intentos que a su vez se han visto frenados por el tribunal constitucional alemán.

Los recortes en los presupuestos de 2025 -a los que se suman los recortes de 2024- para equilibrar la política de rearme que se está llevando a cabo en el país teutón, amenazan con etnicizar parte de los malestares y las insatisfacciones sociales en Alemania. Cosa que no sería algo nuevo, pues ya ocurrió con el ataque a la *Willkommenspolitik* de 2015-2016, pese a que dicha política fue rápidamente abandonada con la externalización de la gestión de la crisis de los refugiados en el régimen de Erdogan.

Si en 2008 ya vimos cómo la crisis avanzó por el arco del mediterráneo meridional, no es descabellado imaginar que la serie de recortes que ha golpeado con fuerza al principal motor económico de la eurozona se exporte al resto de economías de la UE.

En lo que respecta al Estado español, los *NGEU* han supuesto un total de 160.000 millones de euros repartidos en dos fases. La primera de ellas, que inició su andadura en 2023, está vinculada a la parte de los fondos perdidos, mientras que la segunda ha comenzado a establecerse en Enero de 2024, donde el estado español ha solicitado 340 M€ de los fondos concedidos en formatos de préstamo.

Una parte de los fondos adquiridos han sido destinados a las grandes empresas, los proyectos estratégicos y las administraciones autonómicas. Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) son gestionados de forma directa por el Consejo de Ministros y pretenden modernizar las industrias estratégicas con la intención de relanzar su capacidad competitiva. Buena parte de estos fondos, por lo menos en Euskadi, se han visto alterados por el saqueo

de las financiaciones públicas que suponen las consultoras privadas que gestionan la elaboración de los contenidos burocráticos para la obtención de estos fondos como Deloitte, PwC.

Otra parte de estos fondos viene motivada por los grandes conglomerados empresariales para la obtención de liquidez mediante la transferencia de subvenciones, mostrando un carácter ambiguo y de bandazos en lo que respecta a las apuestas estratégicas reales. De ahí la apuesta de la CAPV por situarse dentro de las cadenas globales del hidrógeno verde a través del Corredor vasco de hidrógeno BH2C.

La red vasca de parques tecnológicos es un buen ejemplo de ello: una particular forma de colaboración público-privada en lo que respecta a la innovación tecno-empresarial a la hora de afrontar los retos que supuso la adaptación e innovación al nuevo escenario socio-productivo posfordista. Un proceso de cooperación capitalista en el que el Estado financia la adquisición de esas patentes y esa maquinaria industrial que permitieron la continuación de la industria vasca en la década de los 90, y todo ello en la forma de *clusters* donde se concentran empresas, instituciones administrativas y partes de los departamentos de investigación universitarios.

Frente a otros casos análogos como el de la industria asturiana, el caso vasco, gracias a su particular modelo de desarrollo marcado por una fuerte cooperación estratégica público-privada, ha podido adaptarse mejor a un mercado donde el estado (en este caso las instituciones vascas) han jugado un papel fundamental en la reproducción de los ciclos de acumulación.

Esto es algo que explica la relativa estabilidad del territorio vasco -una industria competitiva en un marco posfordista, que a su vez generaba un marco fiscal propio que ha sido capaz de sostener unas políticas públicas con una gran capacidad de integración y pacificación social- respecto al resto de comunidades que componen el estado español.

El escudo social

Una parte importantísima de los procesos de legitimación del poder político en los últimos años ha girado en torno al llamado “escudo social” que el gobierno de coalición proyectó para hacer frente a la pandemia en el año 2020.

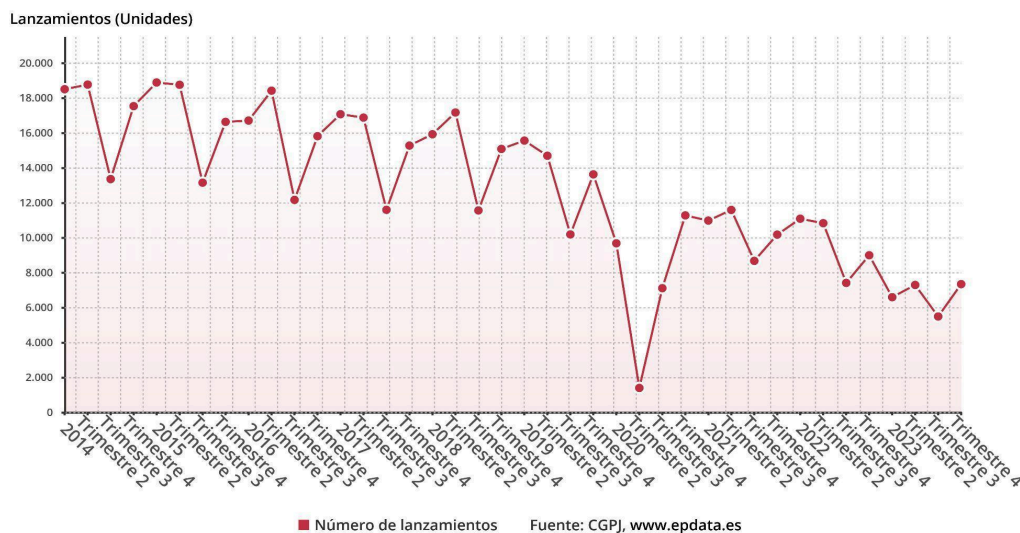
Medidas como el aumento del 15% de las pensiones más bajas del sistema, el refuerzo del bono social eléctrico y térmico, la denominada solución ibérica, la instauración del IMV, la moratoria en determinados tipos de desahucios, la creación de nuevos puestos en la administración pública o los límites a la subida de la tarifa del gas natural han servido, en suma, para legitimar al gobierno, en un contexto donde éste ha generado un relato en torno a sí como última trinchera frente a la ultraderecha.

Dichas medidas, aprovechando el contexto abierto en el escenario europeo, han servido para evitar -al menos de forma temporal- los escenarios más dramáticos del

escenario económico depresivo, además de contribuir a los posteriores procesos de estabilización social que se han producido en estos cuatro años.

Echando un vistazo al número de desahucios ocurridos en una secuencia temporal, veríamos que de acuerdo a datos del Consejo General del Poder Judicial, desde el segundo trimestre de 2020, el número de lanzamientos se ha reducido de forma secuencial.

Evolución del número de desahucios en España



A este tipo de medidas habría que sumarle otras de carácter más bien cosmético, como las vinculadas a los bonos de transporte o, en el caso de la CAPV, las medidas para financiar públicamente, mediante la transferencia en forma de subvenciones, el régimen de alquiler juvenil.³ En la CAPV, sin ir más lejos, las subvenciones al alquiler cumplen una doble función: garantizar a los propietarios el pago de las mensualidades por alquiler –permitiendo así acceder a un nivel de consumo mediante las rentas que no podría alcanzarse a través del salario– y generar una base de ahorros suficiente que permita a estos jóvenes acceder al mercado de la vivienda en propiedad, ya que la cantidad del salario destinada al alquiler se ha reducido notablemente debido a la intervención estatal.

En cualquier caso, se trata de un tipo de subvenciones destinadas a trasladar recursos públicos hacia segmentos del campo social de la izquierda, con la intención de

³ Esto ha ocurrido al mismo tiempo que se ha restringido y dificultado el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a la población migrante. Con la actual reforma de ley, se ha producido un giro definitivo hacia un modelo de *workfare* -se ha constituido un cuerpo específico de la administración para la vigilancia sobre la percepción de estas ayudas-. Además se ha establecido de manera oficial la necesidad de un contrato legal de alquiler (medida que deja fuera de la percepción de la ayuda a aquellos que se encuentran ocupando un inmueble) por primera vez. En dicha ley se incluyen, de paso, numerosas reformas que impiden la percepción de dos RGIs en la misma vivienda, aunque las personas no formen parte del mismo núcleo familiar, como la presencia de dos baños individuales y separados, etc.

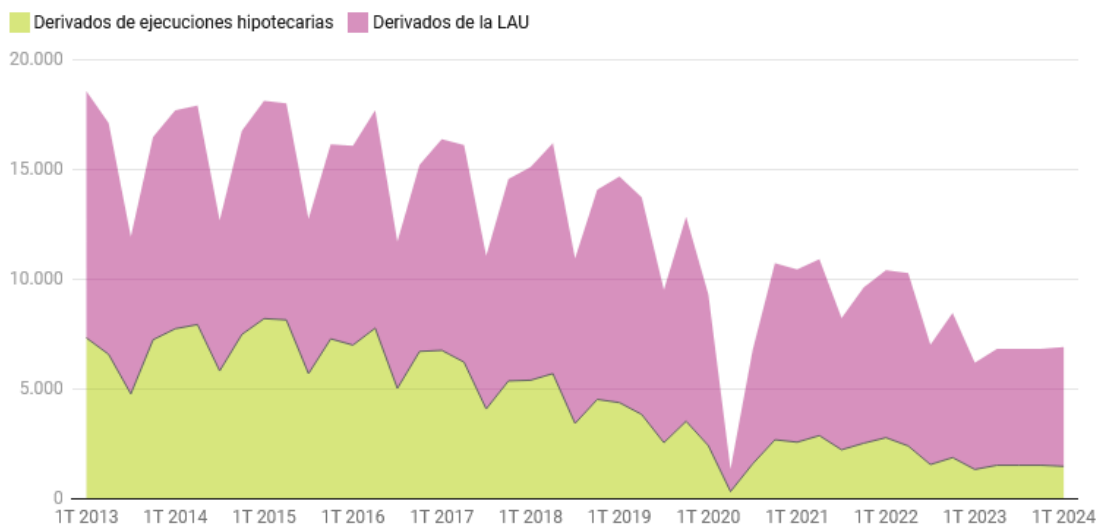
conseguir ventajas parciales a partir del Estado. De ahí que sea el propio Estado el que no se atreve a intervenir de manera taxativa en el mercado del alquiler, ya que uno de los principales acuerdos de país se ha cerrado precisamente sobre el régimen de la vivienda en propiedad. Intervenir sobre el mismo implicaría entrar en conflicto con uno de los principales elementos de configuración de sentido común de la sociedad española.

Y es que el régimen de alquiler constituye la única salida legal en el campo de la vivienda para la población pobre, especialmente la migrante. Si los lanzamientos de desahucios del anterior gráfico los desglosamos entre lanzamientos de desahucios por impagos de alquiler y ejecuciones hipotecarias, encontraremos uno de los motivos por el cual los desahucios del actual ciclo económico no generan los mismos consensos sociales que durante la crisis del 2008.

Tales desahucios apuntan a un segmento de población que carece de la capacidad de representación política suficiente para tener voz propia, por eso es utilizada en el debate público por las opciones de uno y otro signo de acuerdo a las batallas culturales de turno –se trataría de un sujeto sin agencia. El ejemplo más reciente lo tenemos en las batallas culturales relacionadas con la selección de fútbol nacional, con los intentos de instrumentalización de varios jugadores racializados por parte del espacio político de izquierdas.

Lanzamientos practicados en España

Datos trimestrales desde 2013



Fuente: CGPJ - [Descargar los datos](#) - Creado con [Datawrapper](#)

Sin embargo, hay que tener en mente que estos recursos estatales son incapaces de tener una vocación universal –lo impide el escaso crecimiento del escenario económico. De hecho, parte de las cifras de crecimiento de países como España o Italia se han producido en base al endeudamiento adquirido en el marco de los presupuestos comunitarios actuales (2021-2027).

Un marco que, merece tenerse en cuenta también, ya que se encuentra lejos de la retórica discursiva de la deuda mutualizada en la UE. Y es que desde el comienzo de la ejecución *NGEU UE* se ha producido un aumento de las contribuciones de países como España e Italia, que han pasando de ser beneficiarios netos a contribuyentes netos en los presupuestos comunitarios, al mismo tiempo que países como Alemania o Suecia han llevado a cabo una rebaja considerable de sus aportaciones al marco común europeo. De esta forma, parte de los *NGEU UE* no son del todo a fondo perdido, sino que constituyen una suerte de préstamos indirectos por parte de los estados que se han visto beneficiados por haber podido aumentar su capacidad de endeudamiento.

Por último, debemos también situarnos en un contexto donde ninguna medida del escudo social ha sido capaz de intervenir sobre el encarecimiento de la vida, al mismo tiempo que las grandes empresas oligopolistas han aumentado su margen de beneficio. La subida de los tipos de intereses para controlar la inflación ha llevado a que el BCE subiera los tipos de interés del 0% a un 4,5% sin que ello haya tenido apenas incidencia en la caída de los precios. Sin embargo, esta subida sí está teniendo efectos en las familias que ya se encuentran hipotecadas y en aquellas que deben firmarlas para acceder al crédito. De hecho, el número de compraventas de viviendas ha caído, así como el número de firmas de nuevas hipotecas.

Y aunque los datos de la inflación se están reduciendo, los salarios continúan sin recuperar capacidad adquisitiva (se produjo una subida en la media estatal de 3,46%, que en el caso de la CAV llegó al 5,04% y en Navarra al 4,10% pese a que los salarios reales hayan disminuido en este contexto), al mismo tiempo que el precio de la cesta de la compra ha aumentado, pese a que los ritmos de subida hayan ido moderando hasta alcanzar su pico en febrero de 2023 con un aumento del 16,7% (el dato actual es de 11,3%0), donde productos como el aceite han triplicado su precio. En cualquier caso, pese a las dos subidas del SMI que se han producido, la mayoría de la población se encuentra con salarios que durante varios años se han encontrado muy por debajo del IPC o directamente por debajo de la inflación acumulada.

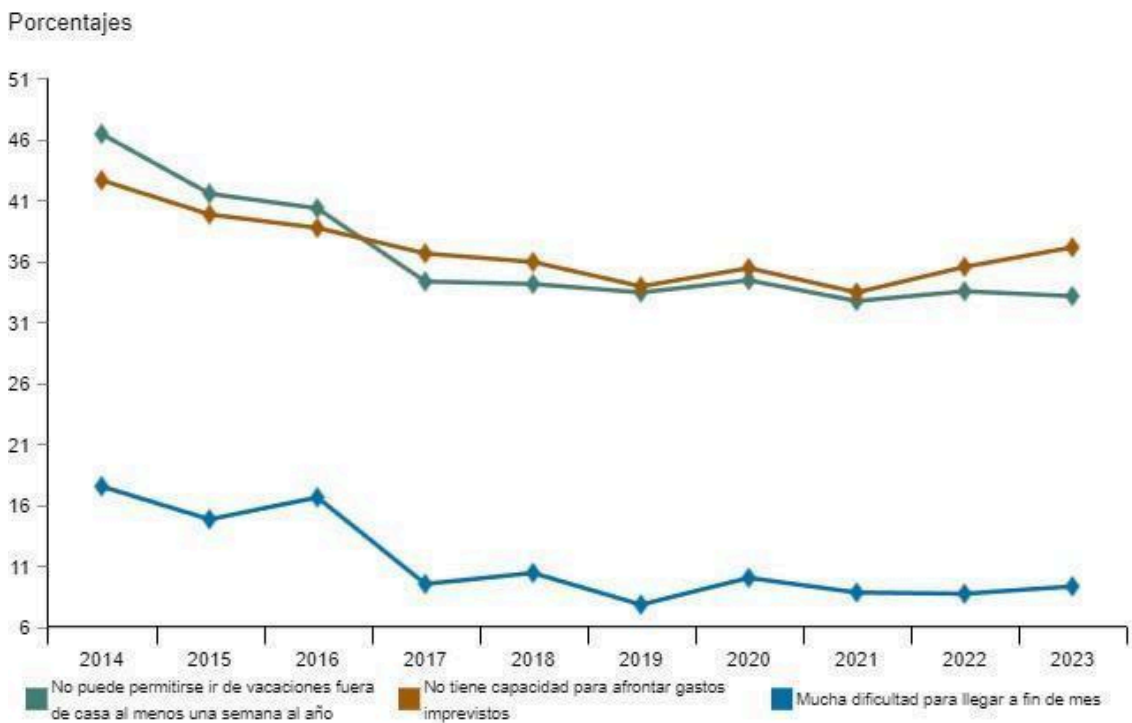
Variación de los precios de los alimentos respecto a febrero de 2021 (%)



Fuente: INE

Durante la anterior y actual legislatura, el Gobierno ha utilizado los datos de la Encuesta de la Población Activa para generar una imagen de la buena gestión económica y laboral. Sin embargo, consultando la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), veríamos que los niveles de pobreza continúan aumentando ligeramente a partir de 2022. Lo que sí parece claro, es que quienes se están viendo afectados por el actual contexto económico son los grupos que se encuentran en los tramos inferiores de ingresos, aquellos segmentos de la población que ocupan los trabajos más precarios.

Evolución de las dificultades económicas



De hecho, aunque la reforma laboral haya limitado algunas de las facilidades para la contratación temporal, han aumentado figuras de contratación que hasta ahora eran anecdóticas, como las de indefinidos por fijos discontinuos, que en la CAV y Navarra han pasado de ser 5545 a 59220 en 2022. Al mismo tiempo, la reforma laboral del Gobierno no ha introducido ningún cambio sobre los elementos con papel disuasorio a los despidos eliminados en las reformas de 2010 y 2012.

De ello se deduce que las actuales reformas en modo alguno han sido capaces de transformar el mercado laboral español. Este espacio continúa acusando de una notable temporalidad y precariedad y que se están produciendo importantes procesos de desacople social entre aquellos segmentos de la población que se van situando en los márgenes de las políticas de integración y bienestar social. Sin embargo, estos desacoplados distan de haber desarrollado una agencia propia, permaneciendo como figuras subalternas en el marco general que ha dibujado el discurso en torno al escudo social durante los últimos años.

La gobernabilidad del estado y el pacto nacional

En enero, el decreto “Omnibus”-el cual permitía el desbloqueo de 10000M euros de los fondos europeos necesarios para blindar el escudo social- sería aprobado por la mínima y en el último momento, con 172 votos a favor y 171 en contra. *Junts* amenazó hasta el último momento con votar en contra, aunque finalmente optaron por la abstención, tras ser reconocidos pasos por el gobierno central “en favor del autogobierno de Cataluña”.

Unos días más tarde, otro paquete de reformas, esta vez impulsado por Yolanda Diaz, sería tumbado por 5 diputados de Podemos, aduciendo en este caso los recortes en las pensiones para los parados de más de 52 años. Lo que seguramente estaba detrás de este No, era el primer aviso del partido morado a Sumar por haberles dejado completamente fuera de la ecuación.

El actual Gobierno de estado presidido por Pedro Sanchez se enfrenta a una legislatura que necesita llevar a cabo una complicada aritmética para sacar adelante sus propuestas durante los próximos años. El cálculo, sostenido sobre la retórica del freno al ascenso de la ultraderecha, debe necesariamente incluir a los partidos políticos representantes de las elites nacionales históricas, que ante la irrupción de VOX como socio preferencial en la alternativa turnista del PP, este partido ve cortada la posibilidad de pactos que incluyan a los partidos nacionalistas.

En cualquier caso, fuera de la retórica del gobierno plurinacional, se trata de seguir sosteniendo el modelo de arreglo político que dio lugar a los acuerdos constitucionales del país. Sin embargo, el escenario no es el del Pujol de CIU, ahora tras el órdago de 2017 convertido en *Junts*. Ni con el PNV de Garaikoetxea -Partido que salvo en el periodo de 2009-2012 ha gobernado sin interrupción en Euskadi-. El estancamiento político y económico de los proyectos de estos nacionalismos conservadores parecen difícilmente asumibles dentro de la retórica del denominado escudo social, pues estos partidos históricamente han cumplido la función bisagra de ser el brazo político de sus respectivas patronales nacionales en Madrid.

Tanto *Junts* como el PNV son partidos que tradicionalmente han reunido a todos los grupos de sus respectivas elites nacionales (administrativa, empresarial, periodística...etc) y que se han beneficiado de los acuerdos de cambio cultural y social abiertos en la transición para plantear *su modelo de país*, construido en torno a las competencias autonómicas alcanzadas. El caso vasco, quizás sea a nivel europeo uno de los mayores ejemplos de una red clientelar que articula a sectores políticos, administrativos y empresariales. Sin embargo, tanto los modelos de gobernabilidad catalanes como vascos atraviesan sendos periodos de descomposición.

El modelo catalan atraviesa una profundísima crisis que reúne un tejido industrial interior completamente arrollado y destrozado, con un modelo de desarrollo turístico mediterráneo, que implica una infraestructura completamente nociva con su territorio, véase el proyecto de Hard Rock en Tarragona. Además, parte de su desarrollo del ladrillo vinculado al turismo parece haber perdido cierto fuelle con los años por los cambios en este mercado, véase el ejemplo de ciudades como Salou, Lloret...etc. Solo

la ciudad de Barcelona ha conseguido sostener un equilibrio como una ciudad global, que sin embargo, en el contexto del referéndum vio un chorreo de fugas de sedes empresariales y un par de toques de atención de Draghi. Al final el *negocio es el negocio* y este no entiende de comunidades nacionales.

El caso del oasis vasco merece una atención un tanto diferente. En las últimas elecciones autonómicas un PNV en horas bajas estuvo a punto de perder la mayoría de asientos del Parlamento Vasco frente a EH Bildu, con quien ha empatado. La apuesta “realista” de EH Bildu por alcanzar “acuerdos de país” -cambios de actitudes en política energética y en la ertzaintza que serian aplaudidos por el PNV-, con los que se alejan de manera definitiva de las bases del MLNV en un proceso comenzado con el llamado al proceso *Abian* de 2015, solo ha podido salvar la continuación del gobierno del PNV a partir de la repetición del gobierno anterior con el PSE. Sin embargo, EH Bildu juega un papel fundamental en Madrid y ha sido fuerza clave a la hora de blindar el escudo social. A su vez, esta permanencia del PNV durante todo este largo periodo iniciado desde la transición está provocando que durante esta legislatura y la anterior el partido esté atravesando graves dificultades para situar nuevos cuadros técnicos competentes en puestos de la administración que no estén relacionados con las clientelas políticas del partido.

En cualquier caso, el continuismo político de las elites vascas representado por el PNV se enfrenta a una difícil tesitura. En primer lugar, el ingente aparato de clientelismo político se enfrenta a un desgaste cada vez mayor debido a escándalos que han salpicado al partido durante los últimos años (Caso de Miguel, el derrumbe del vertedero de Zaldibar), unido a un marcado deterioro de las condiciones de protección y bienestar social que habían existido en Euskadi (véase la digitalización de Osakidetza, la pérdida de atenciones de especialistas a nivel municipal o las restricciones en la percepción de la RGI). A este fenómeno debe unirse la pérdida de capacidad competitiva global de las industrias vascas frente a sus homólogas chinas, mucho más baratas. Desde el año 2016 el cluster vasco del acero ha ido solicitando mayores aranceles a los productos chinos y muchas plantas se encuentran con paradas intermitentes de su productividad. Desde el año 2021 se ha producido un notable aumento de los ERTEs en los sectores siderúrgicos, automotrices y aeroespaciales por la falta de pedidos, aumentando el número de personas afectadas en un 86,4% en el periodo entre 2022-2023. Del mismo modo, el ERTE, en un contexto como el abierto tras la pandemia, resulta un chollo para muchas empresas, que ven como los costes salariales son asumidos de forma directa por el Estado.

Esto en modo alguno significa que se esté produciendo un fuerte proceso de ruptura social en la sociedad vasca ordenada en torno a las clases medias en la actualidad, pero sí parece claro que algunos de los elementos sobre los que se ha sostenido dicha estabilidad comienzan a mostrar grietas cada vez más graves y que las soluciones que se van planteando en el modelo vasco ordoliberal parecen carecer de una estrategia de estabilización a largo plazo -véase proyectos como el Guggenheim de Urdaibai, el hidrógeno verde o la apuesta por las granjas de energías renovables-.

Sea como sea, parece que el escenario que el modelo vasco pudo cabalgar por su relativa posición de ventaja global durante la crisis del 2008 -que llegó de forma mas

tardía y de forma más leve que en el resto del estado- no está pudiendo replicarse una década mas tarde.

¿Hacia el cierre nativista?

En la actual situación de perdedora de la globalización la *UE* se encuentra con importantes dificultades para relanzar un nuevo ciclo económico lo suficientemente amplio o sostenido en el tiempo para que unas políticas de redistribución de la riqueza capaces de generar nuevos procesos de movilidad social generalizados. Esto no significa que procesos de estabilización no puedan tener lugar y que el Estado no pueda intervenir de manera directa en los procesos de reproducción de clase, generando un pueblo en torno a si, de forma directa, generando nuevos puestos de empleo funcional o a través consensos sociales en torno a la izquierda, al mismo tiempo que legisla sobre las regulaciones de mercado laboral y la condición de ciudadanía, los cuales tienden a organizar a la capa de la sociedad en proceso de proletarianización o directamente proletarianizado.

Sin embargo, para una inmensa mayoría de la población, especialmente la joven⁴, su condición no es la funcional. Su posición oscila en llevar a cabo trabajos precarios en el sector de servicios (y que además no pueden ser mucho mejores, porque son trabajos que no generan valor en términos capitalistas y que por ello no tienen demasiado margen de mejora, además de quedar fuera del radar de las estructuras de protección sindical tradicional).

O en una especie de utilización de las habilidades propias, que convertidas en una marca personal, tratan de abrirse camino por el trabajo autónomo. Una forma de estar en el mundo que oscila entre función de la capacidad de cada cual para mantenerse conectado, posicionado y posicionable en lo que vaya tocando o en caerse de ahí y caer en la precariedad.

De acuerdo a los datos de la Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda del Gobierno Vasco -hay que recordar que se trata de uno de los territorios mas ordenados en torno a sus clases medias- un 68,7% de las personas de entre 18 y 44 años manifiestan mucha o bastante intensidad por abandonar el hogar familiar. No obstante, al observar los datos sobre cuántas personas podrían asumir el pago de algo mas de 600€ esta cifra se reduce a únicamente un 17,7% de esos rangos de edad.

En cualquier caso, ante una situación donde los puestos que permiten abandonar la precariedad se encuentran copados por las personas más adultas, para buena parte de esta población la posibilidad de estabilidad se juega a través de las herencias familiares esperadas o a través de la transferencia de recursos por parte de las

⁴ Aquí cabría objetar que a ver que importa a día de hoy un grupo que en términos demográficos es cada vez mas pequeño y tiene menos peso social, político y cultural (al menos en los lugares donde esas esferas tocan poder) .

instancias de gobierno, allí donde existen⁵. De ahí la promesa de la inclusión, que acaba cuajando en los procesos de integración aun cuando la juventud es hoy en día un periodo de la vida que puede alargarse casi indefinidamente.

Y esta sofisticación de los procesos de expulsión/integración de poblaciones en Europa aparece directamente unida a la dificultad real para llevar a cabo inversiones rentables a largo plazo por parte de las empresas europeas en nuevos nichos de mercado “verdes”. Unas inversiones que a su vez permitan llevar a cabo unos programas sociales amparados por el estado lo suficientemente amplios y estables en el tiempo (y es que los programas actuales se sostienen sobre el endeudamiento futuro. Y en ese caldo de cultivo alimentado por el aumento del malestar social y las caídas a distinto nivel que la crisis económica va introduciendo dentro en la sociedad, se van proyectando consensos de cierre neoconservador que ante el “sálvese quien pueda” van planteando una postura que tiene mas qué ver con el “que hay de lo mío” y “los de casa primero”.

En ese caldo de cultivo, quien tiene todas las papeletas para que le toque tragar con la peor parte de una integración cada vez mas estrecha -tal y como se está produciendo el debate a nivel europeo- es la población migrante.

La gestión del régimen de la frontera como ordenador de la fuerza de trabajo dentro de la economía global genera trabas para el tránsito fronterizo, en una criminal agenda que la UE ha aprobado, externalizando la gestión de la frontera europea en terceros países o aumentando los presupuestos de agencias que militarizan la frontera como Frontex. En cualquier caso, esa frontera, en el interior, también genera ciudadanos de segunda categoría con la intención de abaratar los costes laborales a partir de trabas burocrática y procesos de desregularización laboral. Y es que en las condiciones más extremas de hiperexplotación quedan directamente insertas en las lógicas del trabajo sin contrato. Por supuesto, la mayor parte de este tipo de segmentos laborales se encuentran fuera de la estructura de protección sindical tradicional.

En esta gestión de la frontera interna, cada vez está guardando una mayor importancia la policía como productor y generador de orden social. En un panorama comunicativo donde solo se repite que la policía cuenta con pocos medios y que además se ve paralizada por leyes que solo favorecen a los delincuentes, los pánicos morales de la clase media asentada –alimentados por las guerras culturales que fagocitan estos medios de comunicación– encuentran la perfecta justificación a que las crecientes desigualdades dentro de la estructura de clases pasa por el incremento del control y el punitivismo.

De acuerdo al Gabinete de prospecciones sociológicas del Gobierno Vasco, la preocupación sobre la inseguridad y la delincuencia han experimentado una notable subida. Es de hecho uno de los principales problemas que tiene en la actualidad la sociedad vasca de acuerdo a los encuestados, solo por detrás de aquellos

⁵ En el caso vasco, existen dos prestaciones que aglutina esta naturaleza: Emantzipa, dirigida a la población de entre 25 y 30 años, que otorga una cuantía de 200€ por un periodo máximo de dos años y la vinculada a Alokabide, de carácter general, con una cuantía de hasta 300€ por un periodo de hasta 5 años.

relacionados con la situación económica y laboral, Osakidetza y la cuestión de la vivienda.

La emergencia de la seguridad como tema político le viene que ni pintado a los partidos escoba que deben oscilar sus posturas para captar votos entre los segmentos de la clase media, ya que encuentran en este tema un buen nicho pulsiones fuertes que atraviesan a la gran mayoría de la sociedad. Véase la representación del mena como Otredad bárbara que requiere de la violencia, policial mediante, para ser gobernada. En esta misma línea van las declaraciones del PNV en la campaña electoral, donde por primera vez ha traspasado una de las líneas rojas comunicativas del partido, el asociar la delincuencia a la migración. O que en su primera entrevista pública el ahora lehendakari Pradales declarase que el reparto de los menores no tutelados debe ser igual de proporcional que el reparto de los fondos *Next*. En la misma línea que la diputada de *Junts* Marta Madrenas cuando se lamentaba sobre el mayor peso demográfico de la población migrante en Cataluña que en el resto del Estado.

Sin embargo, no solo la policía contribuye a este gobierno del orden. El estado a distintos niveles legisla para sostener dichas fronteras. La degradación de la red pública de educación, con centros escolares de distintos niveles, también contribuye en estos procesos. En este caso, el blindaje de las ikastolas en el caso vasco, acuerdo que fue pactado por el PNV y el PSE, del cual se retiró en el último momento EH Bildu en el cual el debate subyacente era el cierre de centros o que se perdieran líneas escolares también iban en esa línea.

La reciente reforma vasca de la RGI, firmada por todo el arco parlamentario vasco, con la abstención de EH Bildu, funciona en el mismo sentido segregador. Dicha reforma, vendió unos raquítricos aumentos de las cuantías (por debajo de la inflación) y la reducción de edad para su percepción como un considerable avance social. Sin embargo, la obligación de poseer un contrato de alquiler o que bajo la racionalización de igualar todas las ayudas al alquiler -salvo las dirigidas al alquiler juvenil antes mencionada- bajo una única (la PEV) se hayan endurecido las condiciones de acceso desde los 6 meses de padrón a los 3 años ininterrumpidos en el programa de Etxebide. Una medida que sin duda busca expulsar al proletariado migrante del acceso a estas prestaciones.

En ese mismo sentido, el Gobierno Vasco ha propuesto que toda esa población excedente sea gestionada por unos servicios sociales vaciados de presupuesto y capacidades reales, actuando como último recurso dirigido a la gestión de la pobreza. Al mismo tiempo, esta reforma ha creado una policía interna de Lanbide con funciones exclusivas de control y sanción, habilitada para entrar en los domicilios de los preceptores de la RGI con el fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos, que revisa trimestralmente, so pena de exclusión automática de las ayudas.

¿Dos velocidades?

Por presentar de manera esquemática algunos de los elementos del texto podemos resumirlos en:

Los *NGEU UE* fueron presentados como un giro en las políticas europeas de la austeridad del 2008, hacia una naturaleza nekeynesiana. Esto se ha traducido en una relajación por parte de las instituciones europeas que gobiernan la economía en lo que respecta al endeudamiento de los estados europeos.

Estos fondos han podido sostener el gobierno de la paz social desde el contexto pandémico de la COVID-19, evitando los escenarios mas dramáticos. El empleo de estos fondos ha sido utilizado para poner en marcha ayudas públicas dirigidas a tratar la pobreza extrema, así como algunas situaciones que amagaron con salirse de control —véase el conato de huelga de transportistas por la subida del precio del diesel o las protestas de la agroindustria por la instauración de un nuevo marco europeo agrario. A su vez, se han puesto en marcha nuevos procesos de estabilización dirigidos a la clase media, como el fin de los límites a la contratación pública.

Sin embargo, en un contexto de escaso crecimiento económico, el estado no puede llevar a cabo una política pública con vocación universalista. El escenario global y de fondo de los *NGEU UE* responde a una adaptación tardía de Europa frente a sus competidores globales, ante los cuales muestra un retraso tecnológico y de costes económicos cada vez mas evidente. El ambiente bélico de los últimos años no ha hecho sino acelerar dichos procesos, que hunden sus raíces en los procesos de estancamiento económico en los que el capitalismo se encuentra desde la década de los 70.

Debido a esa carencia de escenarios de nuevas expansiones o crecimientos económicos sostenidos, las políticas públicas adoptan en este marco la forma de devolución de favores o privilegización de “lugares” para determinados grupos *lobby* útiles para mantener el status de gobierno. En ese contexto parece difícil que la izquierda pueda volver a generar un “pueblo” en torno así, debido a su fuerte sustrato de clase media, cada vez mas desconectado del mundo obrero. De hecho, en este medio, el recurso al freno ante la extrema derecha ha sido sumamente utilizado como recurso movilizador.

La gestión de la crisis por parte de la izquierda, sí no se producen transformaciones sustanciales, está llamada a ir experimentando una erosión y desgastes cada vez mayores.

El aumento de los precios de los insumos, la caída de compraventa de vivienda y la caída de los salarios reales por la inflación apuntan a que están sucediendo importantes procesos de “proletarización”. En el campo de las reformas que entrarían a tocar el hueso de la sociedad de clases medias, es decir la vivienda y el mercado de trabajo, las políticas del actual Gobierno de coalición han mantenido prácticamente intactas estas dos esferas. La vivienda, en su forma de alquiler continúa suponiendo una barrera hacia la integración para la población migrante y joven -al mismo tiempo que la creciente turistificación apunta a exacerbar todavía mas estos problemas. El mercado laboral continúa mostrando una altísima temporalidad y precariedad debido al peso que ocupa en la economía del país el sector servicios y el turismo. Las subidas del SMI se han mantenido por debajo de la inflación, lo que indica que realmente los salarios han perdido capacidad de acceso al consumo.

Además, debemos tener en cuenta el giro conservador de los representantes políticos de los nacionalismos, necesarios para sostener la aritmética parlamentaria, al mismo tiempo que analizamos la forma en la que se expresa la crisis sobre estos territorios. Una vez cerrado de forma definitiva el *proceso*, Cataluña se presenta como un territorio atravesado por la crisis en sus distintas formas. A las restricciones en el suministro de agua por las sequías, que afectan sectores clave de la economía como la agricultura y la hostelería, se les debe sumar el exceso de turismo, el elevado costo de la vida o la crisis en el acceso a la vivienda. Al mismo tiempo, parte de la patronal catalana se afana en continuar con proyectos extractivistas como el del *hardrock*.

El caso del “oasis vasco” no augura un escenario demasiado distinto. Sí la crisis del 2008 tuvo sus efectos de forma tardía y mas leve que en el resto del Estado, la CAV cada vez se esta viendo mas afectado por la pérdida de capacidad competitiva de su industria, (las llamadas del *cluster* del acero a establecer algún tipo de arancel a los productos chinos comenzaron en 2016) y por un proceso de desgaste de sus elites políticas. La actual *lehendakaritza* de Pradales, solo ha podido sostenerse a través del acuerdo con el PSE y la IA, en su proceso de institucionalización y aceptación del “realismo político” (que generan desgaste en su base movimientista o popular) cada vez se va consolidando como una alternativa. Sin embargo, por primera vez el PNV ha comenzado a asociar discursivamente la migración con la inseguridad, un tema que hasta el actual momento había constituido una línea roja dentro de los marcos comunicativos del partido *jeltzale* -al menos a nivel oficial.

En este escenario, a nivel europeo, cada vez están resonando mas los tambores que llaman al cierre nativista. Esto no es algo que únicamente afecte al campo de la extrema derecha. El endurecimiento de la política de fronteras de la UE apunta en la misma dirección. “El qué hay de lo mío” y el “nosotros primero” seguramente sea un elemento que atraviesa a las sociedades asentadas sobre sus clases medias, que ven como una parte de las mismas va cayendo en los procesos de proletarización.